

BANCOS CENTRALES: DE LA ASEPSIA POLITICA A LA INVASION DE LO FISCAL

David Ibarra
20 de marzo de 2013
El Universal

Uno de los mayores logros –o maleficios- del paradigma económico internacional en boga, fue el de haber reinstalado, sin decirlo, junto a la apertura de mercado, la camisa de fuerza de las rigideces financieras del patrón oro sobre las políticas nacionales a través de implantar en casi todas las latitudes el régimen de autonomía de los bancos centrales.

En efecto, cuando se responsabilizó a la banca central del objetivo único o medular de resguardar la estabilidad de los precios de consumo final -no de los activos, como demuestran las burbujas inmobiliarias-, cuando se les inhibió o prohibió prestar a los gobiernos -separando drásticamente la política monetaria de la fiscal- y cuando se les alejó de la regulación de los sistemas e instituciones financieras, se cumplió el triple propósito de liberarlos de las demandas de los gobiernos, de los controles democráticos y, a los mercados financieros, de las regulaciones estatales. El abuso de esa constelación de libertades y prohibiciones está en las raíces de las crisis de 2001 y la más profunda de 2008; con todo, al comienzo ese esquema reforzó el imperio de la globalización y la esquizofrenia de las políticas de los países periféricos que, desde entonces, se debaten entre aceptar la pérdida de soberanía macroeconómica y el cumplimiento de demandas de los ciudadanos.

El control de la inflación como propósito universal afirmó, se dice, la necesaria asepsia del manejo monetario de cualquier tentación política -aunque fuese democrática- y, a la vez, sirvió de garantía a la estabilidad de las transacciones internacionales que se querían menos aquejadas de manipulaciones cambiarias y alzas dispares de precios entre los países. Algo se ganó en estabilidad y mucho se

perdió en materia de democracia y soberanía. Así, por ejemplo, la supresión de restricciones al crédito de la banca central a los gobiernos, acentuó la dependencia de los mercados internacionales de capitales e impulsó, de otro lado, el desarrollo extraordinario de los grandes conglomerados financieros. En 2011, los países de la Unión Europea pagaron por intereses cerca de 400 mil millones de euros a la banca comercial. Todo ello, auspició el corrimiento del poder político de trabajadores y gobiernos a favor de mercados dominados por empresas transnacionales. Esos cambios del poder, se manifiestan en marcadas tendencias a la concentración del ingreso y en el resquebrajamiento de los mercados de trabajo –por desempleo o informalidad- en casi todos los países. Como consecuencia, los mercados nacionales se debilitan, dejando como única alternativa al crecimiento, la exportación que, en esas circunstancias de restricción de las demandas internas, no puede resultar viable para todos.

A los países periféricos más disciplinados, sólo se les dejó –y aceptaron en su mayoría- el recurso único de instrumentar reformas microeconómicas o microsociales, frecuentemente incapaces de garantizar el crecimiento y la difusión del bienestar entre la población. El Estado-nación fue despojado de sus atribuciones de antaño. Funciones y prerrogativas –sobre todo macroeconómicas- se las apropian los bancos centrales independientes –formalmente parte del propio Estado-, los poderes extraterritoriales y los poderes fácticos nacionales. La política resulta en buena medida expropiada por los dictados inapelables de paradigmas e intereses económicos en buena medida extraterritoriales. Además, cualquier intento de recuperar la autoridad gubernamental perdida, resulta penalizada por los mercados con el fantasma de la fuga de inversionistas que se invoca ante cualquier intento de alterar el *status quo*.

Esos riesgos, en vez de corregirse con acuerdos y regulaciones nacionales e internacionales, se dejaron agravar hasta facilitar la crisis extraordinaria de

2008-2009 que rompió el marco conceptual de la banca central y de la política macro-monetaria dominante. Ante la hondura de un desajuste sistémico que amenazó con destruir a los principales centros financieros y causar estragos económicos mayúsculos, la reacción casi unánime en el Primer Mundo fue la de recurrir a la política fiscal, antes denostada y desplazada por el monetarismo. De ahí la socialización masiva de quiebras y pérdidas ocasionadas en fallas de los mercados financieros y la transformación consecuente de deudas privadas insolutas en endeudamiento público.

Durante bastante tiempo hasta ahí llegó el atrevimiento en hacer regresar el imperio de la política fiscal y de las democracias nacionales. Las críticas al acrecentamiento de las deudas públicas –con olvido de su origen- y a sus remotos efectos inflacionarios, llevan a muchos países a instaurar dolorosos programas de austeridad que retardan la recuperación u originan nuevas oleadas recesivas, precio a pagar por la reconstrucción de la primacía de las finanzas privadas.

Desde el comienzo de la crisis global, como remedio alternativo al gasto público, la banca central abre las espitas de la liquidez y hace reducción sin precedentes de las tasas de interés con los propósitos de ayudar a bancos en problemas, de estimular la oferta de créditos a la producción y a las familias y, así, estabilizar a las economías. Sin embargo, cuando esas medidas no contrarrestan con rapidez las fuerzas depresivas, los bancos centrales primermundistas recurren a medidas heterodoxas, como la monetización -antes prohibida- de títulos gubernamentales y hasta privados -*quantitative easing*-, también con la esperanza de reiniciar la fase ascendente del ciclo económico. Adviértase al respecto como la Reserva Federal de los Estados Unidos todavía compra mensualmente alrededor de 85 mil millones de dólares en créditos hipotecarios y bonos del Tesoro para reducir las tasas de interés de largo plazo.

En los hechos, se persistió en hacer a un lado la política fiscal y preservar hasta donde posible el poder del sector financiero. Ahí se concentran los apoyos gubernamentales y se descuida a las familias endeudadas, el desempleo masivo y los sacrificios de la austeridad impuesta al grueso de las poblaciones. Se insiste en buscar la salida a la crisis global y del Primer Mundo mediante el uso de instrumentos monetarios, mientras se evade hasta donde posible la intervención del Estado y se critica el endeudamiento público, resultado principal de la absorción de deudas privadas. Es decir, se ha querido reemplazar el impacto directo e inmediato del gasto público en la recuperación de la demanda por estímulos indirectos de mercado de efectos inciertos, excepto en resguardar el papel privilegiado de la banca central y por añadidura el de los bancos.

En cuanto a los países en desarrollo, esos enfoques más ideológicos que económicos, perseveran en despojar a los gobiernos electos –no siempre irresponsables inflacionarios- de los instrumentos de acción de la macroeconomía desarrollista y reducir sus campos de acción a reformas de orden sectorial, acaso necesarias, pero incapaces de destrabar el crecimiento y hacerlo con menos injusticias distributivas. Cambiar esa situación, depende en última instancia de la vertebración rigurosa de los objetivos nacionales -sin injerencias definitorias de la banca central-, esto es, de recobrar el ordenamiento democrático sin sujeciones de las políticas públicas macro y microeconómicas con las macro y microsociales.

Por fortuna, en el mundo se erosiona poco a poco la majestad incuestionada de los bancos centrales. Más y más gobiernos –de Japón, Francia, España, Suiza, China- asediados por demandas democráticas y la cortedad de los paradigmas monetaristas, abandonan el unilateralismo antiinflacionario y procuran añadir más y más ingredientes fiscales y cambiarios a sus políticas desarrollistas o contracíclicas.